

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

RADICACION: 76001-23-33-000-2020-01182-00
PROCESO: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
ACCIONANTE: LINA MARÍA JARAMILLO RAMÍREZ
ACCIONADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V), cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020)

Se pronuncia el despacho sobre el recurso de reposición interpuesto por la accionante en contra del auto del 24 de septiembre de 2020, por medio del cual se resolvió sobre el decreto de las pruebas solicitadas por las partes.

I. ANTECEDENTES

1.1. PROVIDENCIA RECURRIDA

Mediante auto del 24 de septiembre de 2020, se emitió la decisión que resuelve la solicitud de pruebas presentadas por las partes de la siguiente manera:

“(…) PRIMERO: NEGAR las pruebas solicitadas por la parte demandante, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: OFICIAR electrónicamente a la Procuraduría General de la Nación, para que con destino al proceso remitan la relación de los cargos de procuradores judiciales I y II vacantes de forma definitiva.

TERCERO: Para el cumplimiento del numeral segundo se otorgan dos días hábiles. Vencido dicho término, ingrese el expediente al despacho de manera inmediata para proferir sentencia.

Respecto de la negativa al decreto de las pruebas de la parte demandante, basada en tres aspectos; por una parte, respecto a la solicitud de oficiar a la entidad accionada a fin de obtener información sobre funcionarios, cargos vacantes y vencimiento de lista de elegibles, por cuanto el artículo 173 del CGP —aplicable por remisión expresa de los artículos 211, 306 del CPACA y 30 de la Ley 393 de 1997, el juez se abstendrá de solicitar pruebas que la parte hubiere podido obtener a través del derecho de petición, por otra parte, respecto de la solicitud de certificaciones por cuanto no cumplían con los parámetros de pertinencia y finalmente, con relación al informe por cuanto en estricto sentido el mismo ya se rindió a través de la contestación de la acción, tornando superflua la misma petición.

1.2. EL RECURSO

La accionante consideró sobre los tres aspectos señalados lo siguiente:

Sobre las pruebas negadas en los numerales, 2, 3, 5 y 10 discrepa en el sentido de que, en aplicación de las oportunidades probatorias, considera discordante la remisión en materia de pruebas en la acción de cumplimiento a las normas del CGP, por tanto, considera no aplicables las normas señaladas en este estatuto, para negar el oficiar en busca de la documentación solicitada.

De las pruebas señaladas de la 5 a la 8 señala, que tienen idoneidad para demostrar los hechos de la demanda, porque estarían orientadas que la Procuraduría evidencie que cuenta con servidores públicos que tiene como función adelantar los concursos de mérito y no necesariamente el deber de contemplar gastos.

Finalmente, sobre el numeral 11 relacionada con la solicitud del informe al Procurador General de la Nación, indica que se puede pedir al representante administrativo de la entidad que rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, la cual no es cierto que la procedencia del decreto de pruebas esté supeditada o no a la contestación de la demanda.

1.3. TRAMITE

De acuerdo con la constancia secretarial obrante en el expediente digital, la parte actora presentó oportunamente el recurso de reposición el día 28 de septiembre de los cursantes, contra la providencia del 24 de septiembre de 2020, la cual fue notificada el 28 de septiembre del año en curso.

El referido recurso se resolverá de conformidad con las previsiones normativas establecidas en el

artículo 16 de la Ley 393 de 1997¹.

II. CONSIDERACIONES

La acción de cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997 no regula los aspectos probatorios por ello, en su artículo 30 consagra lo siguiente:

“ARTICULO 30. REMISION. *En los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código Contencioso Administrativo en lo que sea compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento.”*

Por su parte el régimen probatorio en el CPACA se encuentra regulado en el capítulo IX y en su artículo 211 del CPÁCA, consagra lo siguiente:

“Régimen probatorio

“Artículo 211. *En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.*

Sobre la remisión normativa al CPC hoy CGP no solo lo realiza el artículo 211 del CPACA sino el artículo 306 el cual precisa lo siguiente:

“Aspectos no regulados

“Artículo 306. *En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”*

En este escenario, el artículo 168 del CGP establece que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Por su parte, el artículo 78 del CGP, consagra los deberes de las partes y en su numeral 10 señala como tal:

“10. Abstenerse de solicitarle al Juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiera podido conseguir”

¹ Artículo 16. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.

A su vez, el artículo 173 del CGP precisó:

“Oportunidades probatorias

Artículo 173. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.”

Finalmente, en este acápite es importante señalar que la noción de carga de la prueba indica que es una herramienta procesal que faculta y obliga a las partes de aportar los elementos de prueba para acreditar los hechos que alega en su demanda o en las excepciones propuestas y su aplicación conlleva consecuencias a quienes no cumplan con la misma. Esta figura procesal, se encuentra regulada en el Artículo 167 del Código General de proceso y en el que se establece de manera textual, que *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."*

- **CASO CONCRETO**

Sea lo pertinente señalar, que en el presente caso se trata de la presentación de la acción de cumplimiento la cual tiene por objeto determinar si se debe o no hacer cumplir un deber o obligación contenida en una norma objetiva ley u acto administrativo, aspecto que determina el tema probandum.

En este sentido, la parte demandante afirma que la accionada no ha cumplido un deber u obligación y quiere dar cuenta de los supuestos de hecho que implicarían el incumplimiento del mismo, por ello, surge importante el tema de carga de la prueba.

Por ello, la parte demandante a fin de dar cuenta de los supuestos de hecho de su acción realizó una serie de solicitudes probatorias en la acción de cumplimiento norma que no desarrolla los aspectos probatorios por ende debe remitirse a las normas que la disposición especial remite y señaladas en precedencia, de lo cual se concluye que tanto la ley especial como el CPACA norma a la que se remite, no establecen regulaciones en la materia, por ende finalmente las normas aplicables a no dudarlo sería las CGP.

De conformidad con lo expuesto en precedencia y en relación con la negativa de las pruebas solicitadas en los numerales 1 a 4 y 10, se debe señalar que la decisión no se fundó en el tema de oportunidades probatorias, y los argumentos presentados cuestionando la remisión probatoria, los cuales están contenidas en las normas legales señaladas, y son ineluctables, no tienen la virtud de infirmar la decisión tomada, lo cierto es que las normas citadas y aplicables a la acción de cumplimiento, de forma clara señalan el deber de la parte actora de aportar los documentos señalados y la abstención del juez de tomar ese tipo de decisiones, sin embargo, se debe analizar adicionalmente que la prueba de oficio decretada, suple cualquier resquicio de incertidumbre probatoria, la cual se deberá evaluar con la actitud procesal de las partes y las informaciones que han presentado en orden a verificar la cuestión planteada.

Respecto de las pruebas solicitadas en los numerales 5 a 8, considera el Despacho que de acuerdo a la relación jurídica sustancial, en orden a verificar el cumplimiento o no de un supuesto deber contenido en la Ley u acto administrativo, el objeto de las mismas en orden a constatar funciones, resultarían impertinentes, concepto que no es vacío, sino que tienen que ver que las pruebas estén orientadas a probar los hechos que aluden y que es el objeto de la misma, la cual no es determinar si existen o no cargos con funciones para realizar el deber, sino si la entidad tenía que cumplir con el mismo y si los supuestos facticos confirman ese mismo deber, de ahí que los argumentos expuestos por la recurrente no sean admisibles.

Finalmente, respecto de la negativa de la prueba solicitada en el numeral 11 la razón no fue la aludida por la recurrente en el sentido que no sea conducente o pertinente o que se haya supeditado a la contestación, sino como se señaló en la providencia recurrida de forma clara es, que la misma era repetitiva o superflua ya que la entidad al contestar la demanda en acción de cumplimiento presenta informe sobre la actuación, en la cual se evidencia la posición de la entidad respecto al tema que se debate en la presente acción, en la que presenta una relación de hechos e informaciones relacionadas con la acción de cumplimiento impetrada..

Por lo anterior, el Despacho tiene razones suficientes para mantener incólume la decisión recurrida y no reponer el auto objeto de recurso.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca;

DISPONE:

PRIMERO: NO REPONER el auto del 24 de septiembre de 2020, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, continúese con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JHON ERICK CHAVES BRAVO

Magistrado